



JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DEL CIRCUITO

Armenia Q., veinticuatro de abril de dos mil veintitrés

Procede el despacho a proferir decisión de fondo dentro del presente proceso de revisión de interdicción respecto de **Fernando Cárdenas Quintero**, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1996 de 2019, de manera escrita y el lenguaje claro y comprensible para la persona con discapacidad.

ANTECEDENTES

Hechos

El proceso de declaratoria de interdicción de Fernando Cárdenas Quintero, se profirió fallo de primera instancia el 19 de julio de 1993, declarando la interdicción definitiva por encontrarse en estado de incapacidad mental, designando como curadora a su hermana de crianza Rosa Ofelia Rodríguez de Ospina, decisión que fuera confirmada en segunda instancia.

En virtud de la Ley 1996 se inició a continuación de dicha actuación judicial el proceso de qué trata el artículo 56 de dicha normativa.

Pretensiones:

Ante la expedición de la Ley 1996 que derogó la interdicción judicial, las pretensiones enlistadas en la demanda primigenia quedan sin objeto alguno; procediendo el despacho a requerir al Ministerio Público y a la apoderada designada de oficio de la persona con discapacidad, quienes manifestaron la necesidad de los apoyos, en los ámbitos de comunicación, manejo del dinero y toma de decisiones en materia de salud.

ACTUACIÓN PROCESAL

Por auto del 23 de junio del 2022 se dio inicio a la revisión de medida de interdicción decretada el 19 de julio de 1993, se vinculó al ministerio público, disponiéndose salvaguardias como la designación de profesional del derecho que represente los intereses procesales en garantía de los derechos de la persona con discapacidad, con quien se surtieron las etapas correspondientes.

Al proceso fue aportada la correspondiente visita socio familiar y valoración de apoyos.

En audiencia del 19 de abril hogaño se procedió al agotamiento de las etapas correspondientes, se recibió la prueba de visita socio familiar y valoración de apoyos, se interrogó a quien ostentaba la calidad de curadora, se recibió la declaración de Pedro José Maya Muñoz y se recibieron los correspondientes alegatos de conclusión.

El literal d) del numeral 5 del artículo 56 prevé al hacer referencia a la sentencia de Revisión a continuación del proceso de Revisión que: "*Emitir sentencia en lectura fácil para la persona con discapacidad inmersa en el proceso, explicando lo resuelto*".

Así entonces considera que tal normativa debe hacerse extensiva a todo el contenido de la Ley, siendo el momento de la sentencia el propicio para valorar pruebas y decidir sobre el fondo del asunto.

No se evidencian causales de nulidad que puedan invalidar la actuación, por lo que se procede a proferir sentencia, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

El artículo 56 de la Ley 1996 preceptúa en su parte pertinente:

"En ambos casos, el juez de familia determinará si las personas bajo medida de interdicción o inhabilitación requieren la adjudicación judicial de apoyos, de acuerdo con:

1.- *La voluntad y preferencias de las personas bajo medida de interdicción o inhabilitación, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley. Por lo anterior, la participación de estas personas en el proceso de adjudicación de apoyos es indispensable so pena de nulidad del proceso, salvo las excepciones previstas en la presente ley.*

2.- *El informe de valoración de apoyos, que deberá ser aportado al juzgado por cualquiera de los citados a comparecer según lo dispuesto en el presente artículo, en el plazo que el juez disponga, y en todo caso, antes de la fecha señalada para comparecer ante el juzgado. En caso de que los citados a comparecer aporten más de un informe de valoración de apoyos, el juez deberá tener en consideración el informe más favorable para la autonomía e independencia de la persona, de acuerdo a la primacía de su voluntad y preferencias, así como las demás condiciones establecidas en el artículo 13 de la presente ley...*

3.- *La relación de confianza entre las personas bajo medida de interdicción o inhabilitación y la o las personas que serán designadas para prestar apoyo en la celebración de actos jurídicos.*

4.- *Las demás pruebas que el juez estime conveniente decretar.*

5.- *Una vez vencido el término para la práctica de pruebas, el juez escuchará a los citados y verificará si tienen alguna objeción. Posteriormente, el juez procederá a dictar sentencia de adjudicación de apoyos, la cual deberá..."*

Planteamiento Jurídico

Se determinará si Fernando Cárdenas Quintero requiere la adjudicación judicial de apoyos y en caso de que no pueda expresar sus gustos y preferencias por cualquier medio, si es viable designar la persona que asume su representación en los actos jurídicos y quién acredita la condición para ser designada en uno u otro escenario.

Adjudicación Judicial de Apoyos

El órgano de cierre civil con ponencia del doctor Luis Armando Tolosa Villabona, en providencia del 22 de enero del 2021¹ expresó:

"Es del caso señalar que la Ley 1996 de 2019, se inspiró en la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las personas Con discapacidad, aprobada mediante la Ley 762 de 2002, y la cual tiene por objeto establecer medidas específicas para la garantía del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad mayores de edad, y el acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de la misma.

El artículo 2º de la Ley 1996 de 2019, exige una interpretación acorde con los instrumentos internacionales aprobados por Colombia. En este contexto es pertinente señalar que la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, establece:

"Artículo 1.1. Discapacidad. El término "discapacidad" significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social (...)".

130. La Corte considera que todo tratamiento de salud dirigido a personas con discapacidad mental debe tener como finalidad principal el bienestar del paciente y el respeto a su dignidad como ser humano, que se traduce en el deber de adoptar como principios orientadores del tratamiento psiquiátrico, el respeto a la intimidad y a la autonomía de las personas. El Tribunal reconoce que este último principio no es absoluto, ya que la necesidad misma del paciente puede requerir algunas veces la adopción de medidas sin contar con su consentimiento. No obstante, la discapacidad mental no debe ser entendida como una incapacidad para determinarse, y debe aplicarse la presunción de que las personas que padecen de ese tipo de discapacidades son capaces de expresar su voluntad, la que debe ser respetada por el personal médico y las autoridades. Cuando sea comprobada la imposibilidad del enfermo para consentir, corresponderá a sus familiares, representantes legales o a la

¹ 11001-22-10-000-2020-00607-01

autoridad competente, emitir el consentimiento en relación con el tratamiento a ser empleado".[\[97\]](#) (...)

En la misma providencia expreso que: "Con sustento en lo anterior, con el fin de reemplazar las instituciones jurídicas que anulan la voluntad de las personas con discapacidad intelectual o mental, se crea un modelo de apoyos a favor de esta población con el objeto de lograr que puedan ejercer directamente su derecho a la capacidad jurídica, y con ello, se garantice su autonomía, independencia y dignidad humana. En el marco del modelo social de la discapacidad se comprende que el ejercicio de la capacidad legal debe estar acompañado con una asistencia que elimine las barreras sociales, culturales y ambientales que no permiten manifestar la voluntad. De ese modo, como lo dice el Comité de la Convención, los "apoyos" implican un conjunto de "arreglos oficiales y oficiosos, de distintos tipos e intensidades." En otras palabras, los apoyos se pueden traducir en distintas medidas encaminadas a lograr la materialización de la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad. Estos apoyos pueden ser el acompañamiento de una persona de confianza en la realización de algún acto jurídico, métodos de comunicación distintos a los convencionales, pueden ser medidas relacionadas con el diseño universal o la accesibilidad, entre otros. Los tipos de apoyo y sus intensidades dependerán y variarán notablemente de una persona a otra debido a la diversidad de las personas con discapacidad y sus necesidades. Los objetivos principales de los apoyos deben ser: "(i) obtener y entender información; b) evaluar las posibles alternativas a una decisión y sus consecuencias; c) expresar y comunicar una decisión; y/o d) ejecutar una decisión".[\[163\]](#) Lo realmente importante bajo este modelo de apoyos, es la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad, elementos que serán ahora el centro de la toma de sus decisiones".

Más recientemente la Corte Constitucional en sentencia T-048 del 2023 expresó que:

"Retomando, el sistema de apoyos reemplazó las figuras que sustituían la voluntad de la persona en situación de discapacidad mental. Lo anterior, al punto de que el artículo 53 de la Ley 1996 de 2019 consagró la "prohibición de interdicción", a partir de su expedición. Actualmente, en consecuencia, no

está permitido (i) "iniciar procesos de interdicción o inhabilitación" o (ii) "solicitar la sentencia de interdicción o inhabilitación para dar inicio a cualquier trámite público o privado a partir de la promulgación de la presente ley."

Sentido del régimen de transición. Para que el tránsito del régimen de interdicción y guardas al de autonomía y apoyos no genere efectos indeseables derivados de la eventual celebración de actos jurídicos que puedan afectar los derechos de la persona que fue declarada interdicta o los de su familia, la Ley 1996 de 2019 debe interpretarse a partir de dos grandes previsiones.

La primera, se encuentra en el párrafo del artículo 6 que establece la "Presunción de capacidad." Esta disposición afirma que "el reconocimiento de la capacidad plena previsto en el presente artículo aplicará, para las personas bajo medida de interdicción o inhabilitación anteriores a la promulgación de la presente ley, una vez se hayan surtido los trámites señalados en el artículo 56 de la misma."

La segunda, el artículo 56 el cual alude al "Proceso de revisión de interdicción o inhabilitación" en virtud del cual se dispone que: (i) dentro de los 36 meses siguientes a la entrada en vigencia del Capítulo V de la ley -sobre adjudicación judicial de apoyos-, los jueces de familia que hayan adelantado procesos de interdicción o inhabilitación deberán citar de oficio tanto a quienes cuenten con una sentencia de interdicción o inhabilitación, así como a las personas designadas como sus curadores o consejeros, con el fin de determinar si aquellos requieren la adjudicación judicial de apoyos; (ii) dentro del mismo término, las personas afectadas por una de estas medidas podrán acudir directamente ante el juzgado de familia que adelantó el proceso respectivo para solicitar la revisión de su situación jurídica; con todo, (iii) el juez de familia determinará si las personas interdictas o inhabilitadas requieren la adjudicación judicial de apoyos, conforme a (iii.1) su voluntad y preferencias; (iii.2) el informe de valoración de apoyos aportado al juzgado por los comparecientes, el cual deberá contener la verificación de que, aun después de agotar todos los ajustes y apoyos técnicos disponibles, la persona se encuentra "imposibilidad para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio posible"; (iii.3) los apoyos que la persona requiere para la comunicación y toma de decisiones en su vida diaria, "o en lo relacionado con el manejo financiero, salud y demás aspectos relevantes, en caso de que la persona se encuentre imposibilitada para manifestar su voluntad y

preferencias por cualquier medio”; y (iii.4) las personas que han fungido o pueden fungir como apoyo en la toma de decisiones.

Por último, el segundo párrafo del citado artículo 56 establece que aquellas personas bajo medidas de sustitución de la voluntad proferidas con anterioridad a la ley, “se entenderán como personas con capacidad legal plena cuando la sentencia del proceso de revisión de la interdicción o de la inhabilitación quede ejecutoriada.”

El diseño legislativo, basado en el reconocimiento de la capacidad jurídica y la autonomía, pero consciente de la necesidad de un régimen de transición, puede generar algunas dudas interpretativas, que deben ser resueltas a partir del principio de interpretación conforme a la Constitución Política, a la que se encuentra incorporada también la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.²

Primero, la Convención citada exige que aquellas figuras jurídicas que permiten sustituir a través de un tercero las decisiones, voluntad y preferencias de las personas en situación de discapacidad sean abolidas, con el fin de que aquellas puedan ejercer, independientemente de si hacen uso de apoyos o no, su plena autonomía, independencia y dignidad humana. Por esta razón, el Legislador prohibió adelantar nuevos procesos de declaratoria de interdicción o inhabilitación, a partir de la expedición de la Ley 1996 de 2019. Segundo, el Congreso de la República condicionó la anulación de los efectos de aquellas declaratorias de interdicción establecidas antes de la promulgación de la norma antes referida a que estas sigan un proceso de revisión, bien sea de oficio, bien a petición de parte.

Pues bien, una interpretación sistemática de ambas disposiciones, y armónica con la Constitución y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, conduce a la conclusión de que la revisión de la sentencia tiene como única finalidad la evaluación de necesidad de apoyos, pero no a preservar en el tiempo la figura (ni la lógica) de la interdicción, pues esta es una institución opuesta al paradigma del derecho internacional de los derechos humanos en materia de capacidad. Aunada a esta conclusión, desde un punto

² *Ley 1996 de 2019. Artículo 2: “La presente ley debe interpretarse conforme a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los demás pactos, convenios y convenciones internacionales sobre derechos humanos aprobados por Colombia que integren el bloque de constitucionalidad y la Constitución colombiana. // No podrá restringirse o menoscabar ninguno de los derechos reconocidos y vigentes en la legislación interna o en instrumentos internacionales, aduciendo que la presente ley no los reconoce o los reconoce en menor grado.”*

de vista teleológico o finalista, la aplicación de las normas del régimen de transición debe mantener el enfoque de maximización de la autonomía, pues este no nace en la ley citada, sino que irradia desde la propia Constitución”.

CASO CONCRETO

Está acreditado que Fernando Cárdenas Quintero cuenta con 82 años, conforme las probanzas técnicas allegadas al plenario, se establece que es una persona que está absolutamente imposibilitada para expresar sus gustos y preferencias, así entonces tampoco puede expresar su voluntad y menos tener conocimiento de las consecuencias de cualquier acto jurídico que deba realizarse.

Así entonces se determina que al revisar la sentencia de interdicción la respuesta al interrogante dado en el planteamiento jurídico en la parte inicial es positiva, es decir, que en efecto Fernando Cárdenas Quintero, dadas sus condiciones de incapacidad mental y física por los problemas de salud que padece requiere de la adjudicación judicial de apoyos.

Como se menciona en el dictamen pericial de valoración de apoyos la persona aquí interviniente no presenta autonomía para decidir sobre su estilo de vida y debido al deterioro progresivo es necesario un acompañamiento constante y permanente contando con una escasa red de apoyo familiar.

El despacho de manera directa pudo evidenciar la situación de vida de la persona con discapacidad, quien reside con su hermana y el compañero permanente de ésta, en un hogar donde se le dispensan las necesidades básicas, incluso fue necesario para eliminar barreras que lleven a más desconocimiento de sus derechos, realizar la audiencia de trámite en la misma, pues la persona con discapacidad presenta dificultades para su desplazamiento y su hermana igualmente con dificultades para el mismo y con el temor de no abandonar la residencia dejando solo a su hermano.

Fernando Cárdenas Quintero no cuenta con bienes de fortuna y subsiste de su ingreso único al ser beneficiario de una pensión de sobreviviente.

Se reitera entonces, que Fernando requiere apoyos de intensidad fuerte y permanentes, esto es, para todos los ámbitos de su vida cotidiana, aseo, alimentación, bienestar físico y mental, la asistencia de salud con el correspondiente acompañamiento a citas, valoraciones y procedimientos, como también las gestiones administrativas que en dicho entorno deben realizarse, finalmente, para los trámites administrativos y bancarios relacionados con el manejo de su pensión de sobreviviente.

Eso sí, no se evidencian actos jurídicos presentes en que deba actuar un tercero en representación de la persona con discapacidad, por tanto si en el futuro lo requiere toda vez que se dan las circunstancias previstas en el numeral 2 del artículo 48 de la Ley 1996, deberá solicitarse la correspondiente autorización.

Ahora en cuanto a la persona que debe ser designada como persona de apoyo, debe determinar el despacho que no obra en el plenario primigenio alguna actuación que conlleve a desvirtuar tal calidad en quien ya fungía como curadora de Fernando Cárdenas Quintero y con el interrogatorio de parte por ella vertido y la declaración de quien se dice es su compañero permanente Pedro José Maya Muñoz, se ratifica sin lugar a equívocos que es Rosa Ofelia Rodríguez quien debe ser la designada para dichos apoyos.

Máxime si se tiene en cuenta que es la persona de confianza lo que se desprende del transcurrir del tiempo.

Los cambios que trajo la ley 1996 en conclusión y continuando en referencia al órgano de cierre constitucional son: "(i) elimina del ordenamiento civil la incapacidad legal absoluta por discapacidad mental; (ii) deroga el régimen de guardas e interdicción para las personas en condiciones de discapacidad mental, cognitiva o intelectual; (iii) presume la capacidad de goce y ejercicio para todas las personas en situación de discapacidad; (iv) establece dos mecanismos que facilitan a las personas en situación de discapacidad manifestar su voluntad y preferencias en el momento de tomar decisiones con efectos jurídicos: (a) los acuerdos de apoyos y (b) la adjudicación judicial de apoyos; (v) regula las directivas anticipadas, como una herramienta para las

personas mayores de edad en las que se manifiesta la voluntad de actos jurídicos con antelación a los mismos”

No puede perderse de vista finalmente, que la ley 1996 recupera la capacidad legal de aquellas personas sobre quienes recaía la medida de interdicción, cuya figura la desplazaba, así entonces, en virtud de esta decisión finaliza la declaratoria de la interdicción judicial y por tanto el registro que de ella aparece vigente en el correspondiente registro civil de nacimiento, razón por la cual se remitirá esta decisión a la Notaría Única del Circulo de la Tebaida Quindío, para que proceda a la cancelación de tal registro.

Finalmente, en cuanto a los informes que debe realizar la persona designada como apoyo y en el entendido en este preciso caso de total impedimento de Fernando Cárdenas Quintero para expresar su voluntad, gustos y preferencias, la persona designada como apoyo como lo indicó el Ministerio Público en sus alegatos de conclusión deberá precisar en qué se invierte y como se distribuyen los ingresos derivados de la pensión en los gastos relacionados con el mismo.

Se dispondrá en este caso específico como salvaguarda, la realización de una visita socio familiar cada año para verificar las condiciones de vida de la persona con discapacidad.

Atendiendo que el proceso primigenio fue iniciado a instancias del Ministerio Público, por intermedio de la Procuradora Cuarta en asuntos de familia, se instará a que por intermedio de dicha entidad se lleve a cabo la correspondiente notificación por aviso.

Por lo expuesto, el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Armenia Quindío administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: **ADJUDICAR APOYO JUDICIAL** a **Fernando Cárdenas Quintero**, por las razones antes expuestas.

SEGUNDO: **DESIGNAR** como persona de apoyo a **Rosa Ofelia Rodríguez**.

TERCERO: **DEFINIR** como apoyos que requiere para todos los ámbitos de su vida cotidiana, aseo, alimentación, bienestar físico y mental, la asistencia de salud con el correspondiente acompañamiento a citas, valoraciones y procedimientos, como también las gestiones administrativas que en dicho entorno deben realizarse, finalmente, para los trámites administrativos y bancarios relacionados con el manejo de su pensión de sobreviviente.

CUARTO: **DETERMINAR** cómo duración de los apoyos el término máximo establecido por la ley que son 5 años.

QUINTO: **ANULAR** la inscripción de la sentencia de interdicción en el Registro Civil de Nacimiento de la persona con discapacidad. Remítase electrónicamente la presente providencia a la Notaría Única del Círculo de La Tebaida Quindío.

SEXTO: **ADVERTIR** que Fernando Cárdenas Quintero se entenderá como persona con capacidad legal plena cuando la presente decisión quede ejecutoriada, con las previsiones sobre la validez de los actos conforme la Ley 1996 y con las previsiones hechas en la parte motiva respecto de los actos jurídicos que requiera realizar en el futuro.

SÉPTIMO: **REMITIR** a los intervinientes dentro del proceso, la presente decisión (la profesional del derecho designada deberá dar lectura a esta decisión en compañía de la persona con discapacidad, para lo cual realizará la comunicación correspondiente con los ajustes razonables que requiera). En caso de ausencia de recursos de una vez se indica la finalización de su gestión, en caso contrario, hasta el auto de obediencia a lo resuelto por el superior.

OCTAVO: **NOTIFICAR** al público por aviso, que se insertará una vez por lo menos en un diario de amplia circulación nacional, en este caso se determina el Espectador. Diligencia que se llevará a cabo conforme se indicó en la parte

motiva, así mismo se insertará la sentencia en el aplicativo Tyba. Procédase por secretaría de conformidad.

NOVENO: **DISPONER** Al término de cada año la realización de un informe desde la ejecutoria de la sentencia de adjudicación de apoyos en el cual dispondrá:

1. El tipo de apoyo que prestó en los actos jurídicos en los cuales tuvo injerencia, en especial como fue el manejo del ingreso pensional de la persona aquí interviniente.
2. Las razones que motivaron la forma en que prestó el apoyo, con especial énfasis en cómo estas representaban la voluntad y preferencias de la persona.
3. La persistencia de una relación de confianza entre la persona de apoyo y el titular del acto jurídico.

DÉCIMO: Disponer como salvaguarda de la persona con discapacidad, la realización de una visita socio familiar a través del equipo de trabajo social adscrito al Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Civiles y de Familia cada año, a fin de verificar las condiciones de vida de la persona titular del acto jurídico y que a través de la misma se reitere la obligatoriedad del informe ya mencionado. Líbrese la comunicación respetiva para la respectiva programación anual de la visita referida.

NOTIFÍQUESE

OMAR FERNANDO GUEVARA LONDOÑO

Juez

Firmado Por:
Omar Fernando Guevara Londono
Juez
Juzgado De Circuito
Familia 003
Armenia - Quindío

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **35342e6d46d444cd36ea79ce5938e8d76ed100b3e6a5e685b3c20ef447e6027f**

Documento generado en 23/04/2023 11:36:51 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>